Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a trece de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión con número **07500/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, quien en lo sucesivo se le denominara como la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli,** en lo subsecuente **el Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO.** Con fecha cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la parte **Recurrente** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo posterior el **SAIMEX**, ante **el Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número de expediente **00592/CUAUTIZC/IP/2023**,mediante las cuales solicitó información en el tenor siguiente:

*"Solicito las medidas que implementa el ayuntamiento para informar a la ciudadania en general, sobre si es o no legal los permisos que otorga la asociacion ACME"*

Modalidad de entrega: ***A través del SAIMEX***

**SEGUNDO.** De las constancias que obran en el expediente electrónico, aperturado con motivo del ingreso de la solicitud de información, se advierte que en un primer momento el **Sujeto Obligado** consideró no contar con los elementos para dar atención a la solicitud de información, por lo que el mismo día de ingreso de la solicitud, requirió al particular, proporcionara mayores datos y con ello cumplir eficazmente con la Ley que nos ocupa y permitir el libre acceso a la información.

Requerimiento de aclaración que fue atendido el día cinco del mismo mes y año, manifestando lo siguiente:

*“Solicito los documentos en posesión del ayuntamiento en dónde se me mencioné a la asociación ACME”*

**TERCERO.** Una vez desahogado el requerimiento de aclaración, el Sujeto Obligado consideró contar con los elementos necesarios para dar atención a la solicitud, por lo que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitió respuesta en los términos siguientes:

*"En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Por medio del presente y con fundamento en los artículos 3, 11, 40, 41, 46, 53 fracciones II, V y VI y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como el numeral TREINTA Y OCHO inciso d), de sus Lineamientos para la recepción, trámite y resolución de las solicitudes de acceso a la información, así como de los Recursos de Revisión que deberán de observar los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; ANEXO EL OFICIO DE RESPUESTA QUE A SU SOLICITUD LE ENTREGA LA (1) SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, (2) DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, (3)DIRECCIÓN JURIDICA 1 “En atención a la solicitud ingresada mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), bajo el folio 00592/CUAUTIZC/IP/2023, la que a la letra señala; “Solicito las medidas que implementa el ayuntamiento para informar a la ciudadania en general, sobre si es o no legal los permisos que otorga la asociacion ACME, Solicito los documentos en posesión del ayuntamiento en dónde se me mencioné a la asociación ACME”. (sic). Anexo copia simple del oficio SA/2700/2023, por el cual la C. Dorotea Tabares Sarabia, Titular del Departamento de Normatividad y Convenios, da respuesta a la solicitud en comento. Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. “(SIC) 2 “ Por este conducto le anticipo un cordial saludo, y al efecto me refiero al oficio de referencia, mismo que contiene la solicitud número 00592/CUAUTIZC/IP/2023, del sistema SAIMEX, misma que en su parte medular indica como información solicitada, la siguiente: “Solicito las medidas que implementa el ayuntamiento para informar a la ciudadania en general, sobre si es o no legal los permisos que otorga la asociacion ACME, Solicito los documentos en posesión del ayuntamiento en dónde se me mencioné a la asociación ACME “(SIC) Me permito informarle que, lo solicitado no es competencia de esta Dirección de Desarrollo Económico, ya que solo cuenta con las facultades contenidas en el artículo 42 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (2022-2024); por lo que, ninguna guarda relación con informar a la ciudadana la implementación de medidas relacionadas con la legalidad o ilegalidad de permisos que otorguen las asociaciones, ni poseer la documentación relacionada. Sin más que puntualizar, le reitero mis respetos. “(SIC) 3 “ Atendiendo al Principio de Máxima Publicidad que impera en materia de la Transparencia, dispuesto en el artículo 4º, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se hace de su conocimiento que esta Dirección es incompetente para dar contestación a la solicitud del Peticionario, de conformidad con la fracción XIV del artículo 50 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (2022-2024); Por lo anteriormente expuesto, no me encuentro en posibilidades de remitir la información solicitada dado que no es competencia de esta dependencia administrativa, por lo que se NO administró la información que enuncia el peticionario y por consiguiente a esta área Jurídica no le es posible generar acuerdo de inexistencia de conformidad con el criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en fecha cinco de abril de 2017, en la segunda época, mediante el siguiente criterio 07/17: Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. No obstante, en aras de proporcionar una orientación al solicitante se informa que el artículo 115. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece como base de la división territorial y de organización política y administrativa, al municipio. Puntualmente la fracción II, párrafo segundo, del artículo anteriormente citado establece: “II. … Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal” SIC. El artículo el artículo 1.22 del Código Administrativo del Estado de México, establece que serán nulos los actos, procedimientos, convenios y procesos administrativos que se dicten cuando se emitan en contravención a dichas disposiciones. Por tanto, todo permisos o autorización, para ser legal debe cumplir con los requisitos de ley establecidos y desde luego ser emitido por autoridad competente para que sea válido. En ese tenor, se debe consignar la formalidad administrativa y de validez para que el derecho produzca efectos frente a terceros, ya que sólo la autoridad administrativa competente está facultada para expedir la licencia o permiso correspondientes, siempre y cuando se colmen plenamente los requisitos legalmente previstos. Por consiguiente, la exhibición de un documento por autoridad no competente, no demuestra contar con un derecho legítimo y, por tanto, es insuficiente para acreditar el interés jurídico. “(SIC) De lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, en términos de los artículos 11, 41, 46 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a Usted pido se sirva tener a esta Coordinación de Transparencia por notificada en tiempo y forma la contestación a su solicitud de acceso a la información para los efectos legales correspondientes, a través del sistema denominado SAIMEX. "*

Se hace constar que el **Sujeto Obligado** adjunto los archivos electrónicos “***RESPUESTA SAIMEX 592.pdf, 592.pdf*** y ***SAIMEX 592.pdf***”, que al ser del conocimiento de las partes, se omite su inserción en este apartado, máxime que serán objeto de estudio en párrafos posteriores.

**CUARTO.** Inconforme con la respuestas proporcionada, el día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, la parte **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión, quedando registrados en el **SAIMEX** con los números de recurso **07500/INFOEM/IP/RR/2023,** en el que expresó como acto impugnado y razones o motivos de inconformidad, los siguientes:

**Acto Impugnado:**

*“Respuesta” (sic)*

**Razones o motivos de inconformidad:**

*“Niegan la información pese a que en sus archivos si obra documentos referente a la asociación mencionada. Adjunto prueba. Solicito que no mientan y envíen todos los documentos donde referencian a esa asociación” (sic)*

Asimismo, se hace constar que la parte Recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, adjuntó los documentos *“****RESPUESTA SAIMEX 591 (1).pdf*** y ***ANEXO 591 (1).pdf****”*, que habrán de ser analizados en párrafos posteriores.

Recurso de revisión que se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y con fundamento en el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, asimismo, se turnó a través del **SAIMEX** al Comisionado Presidente **JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS,** a efecto de que decretara su admisión o desechamiento.

**QUINTO.** En fechas treinta de octubre de dos mil veintitrés, atento a lo dispuesto en el artículo 185 fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se acordó la admisión a trámite del referido recurso de revisión, así como la integración del expediente, que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, realizarán manifestaciones y ofrecieran las pruebas y alegatos que a su derecho conviniera o exhibieran el informe justificado, según fuera el caso.

**SEXTO.** Una vez abierta la etapa de instrucción, se advierte que el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado, a través del documento electrónico *“****INFORMEN JUSTIFICADO 7500.pdf****”*, a través del cual ratificó su respuesta primigenia. Informe justificado que fue puesto a la vista de la parte **Recurrente**, a efecto que presentara las manifestaciones que a sus intereses conviniera, sin que exista constancia de desahogo de la misma. Así mismo se aprecia que no se llevaron a cabo audiencias durante la sustanciación de los recursos de revisión, todo lo anterior en términos de los artículos 185 fracciones II y IV, y 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**SÉPTIMO.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes de siete días hábiles para realizar sus manifestaciones en los acuerdos de admisión, y no habiendo prueba pendiente por desahogar, ni que documentos que integrar a los expedientes electrónicos, se decretó el cierre de instrucción en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar el expediente a la resolución que en derecho proceda.

**OCTAVO.** De las constancias que integran el expediente electrónico, se advierte que ha transcurrido el término de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**a) Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**b) Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**c) Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos por el ahora **Recurrente**, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 10, 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Del alcance del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es menester señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

Así mismo, esta Ponencia considera importante abordar el análisis de los requisitos de procedibilidad de los recursos de revisión, así el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente:

*“****Artículo 180****. El recurso de revisión contendrá:*

***I****. El Sujeto Obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II****. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

***III****. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

***IV****. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

***V****. El acto que se recurre;*

***VI****. Las razones o motivos de inconformidad;*

***VII****. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

***VIII****. Firma del Recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

*En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.”*

(Énfasis añadido)

En principio, de una interpretación del artículo transcrito se observan los requisitos que deberán contener los recursos de revisión; sobre el particular, de la revisión del expediente electrónico del SAIMEX se desprende que el solicitante y ahora **Recurrente**, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, no proporcionó un nombre para que sea identificado, ya que en el apartado de “DATOS DEL SOLICITANTE”, señalo nombre o seudónimo con el cual desee identificarse *“****XXXXX XXXXXXXXX****”*, por lo que no tiene certeza sobre su identidad, lo que en estricto sentido, no se colmarían los requisitos establecidos en el citado artículo 180 de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, debe destacarse que el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el nombre no es un requisito *sine qua non* que los particulares y, en su caso, los Recurrentes deban señalar, por el contrario la Ley de Transparencia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, con nombre incompleto o seudónimo.

Correlativo a ello, cabe mencionar que los artículos 6, Apartado A, fracciones I, III, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública; preceptos cuyo texto y sentido literal es el siguiente:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*“****Artículo 6o****. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*…*

***V****. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.”*

*…*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

*“****Artículo 5****. …*

*…*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III****. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”*

(Énfasis añadido)

Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca lo siguiente:

*“****Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

En esa virtud, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se reitera que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.

Robustece lo anterior, el Criterio 6/2014 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se reproduce para una mayor referencia:

*“****Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que el solicitante acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización.*** *De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, 2º, 4º y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores requisitos que los establecidos en la Ley. En este sentido, las dependencias y entidades, sólo deberán asegurarse de que, en su caso, se haya cubierto el pago de reproducción y envío de la información, mediante la exhibición del recibo correspondiente.*

*Resoluciones*

*• RDA 5275/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.*

*• RDA 2937/13. Interpuesto en contra de LICONSA, S.A. de C.V. Comisionado. Ponente Gerardo Laveaga Rendón.*

*• RDA 3609/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.*

*• RDA 3361/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.*

*• RDA 0563/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.”*

En ese orden de ideas, se estima que el requerimiento relativo al nombre como presupuesto de procedibilidad podría limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, debido a que el hecho de solicitar la identificación del **Recurrente** a través de dicho dato personal, en ciertos extremos se equipara a una exigencia acerca de su interés o justificación de su utilización, lo que materialmente haría nugatorio un derecho fundamental.

Aunado a ello, para el estudio de la materia sobre la que se resuelven los recursos de revisión resulta intrascendente el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Federal, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconocen la prerrogativa de los individuos para no acreditar dicho interés o justificar su utilización, por lo que este Órgano Garante en la materia se encuentra impedido para realizar dicho análisis, en la inteligencia de que al limitar un derecho humano, como lo es el derecho de acceso a la información pública, por una cuestión procedimental.

En consecuencia, dado lo expuesto y fundado con anterioridad, se estima que el requisito relativo al nombre del Recurrente no constituye un presupuesto indispensable de procedibilidad de los recursos de revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano que no requiere legitimación en la causa, sino que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de recurso de revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que el Recurrente, es la misma persona que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.

De igual manera, el propio artículo 180 de la Ley de Transparencia local, en su último párrafo establece que cuando el recurso se interponga de manera electrónica, no será indispensable que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre del Recurrente, por lo que en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución, cuando una vez admitidos los recursos de revisión se advierta una causa de improcedencia, que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines.

***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.*** *Del examen de compatibilidad de los artículos* [*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1)) *con el artículo* [*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.*

Por lo que una vez que se analizó el expediente en estudio se cae en la cuenta de que no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191****. El recurso será desechado por improcedente cuando:*

***I****. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

***II****. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por la Recurrente;*

***III****. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

***IV****. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

***V****. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

***VI****. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

***VII****. La Recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no son una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que **la Recurrente** amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

**CUARTO. Estudio y resolución del recurso de revisión.**

Se procede al análisis de los recursos, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en los expedientes electrónicos, para así estar en posibilidades este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8° de la Ley de Transparencia local.

Atentos a la redacción de la solicitud de información se puede apreciar que el **Recurrente** peticiona la entrega en formato PDF, la entrega de lo siguiente:

1. las medidas que implementa el ayuntamiento para informar a la ciudadanía en general, sobre si es o no legal los permisos que otorga la asociación ACME;
2. los documentos en posesión del ayuntamiento en dónde se me mencioné a la asociación ACME;

El **Sujeto Obligado** se sirvió en dar respuesta por medio de los documentos electrónicos “***RESPUESTA SAIMEX 592.pdf, 592.pdf*** y ***SAIMEX 592.pdf***”, de los que se procede a la descripción de su contenido, a continuación:

* ***RESPUESTA SAIMEX 592.pdf:*** oficio DDE/2357/2023 del nueve de octubre de dos mil veintitrés, remitido por la Directora de Desarrollo Económico al Titular de la Coordinación de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado, informando sustancialmente:

*“…lo solicitado no es competencia de esta Dirección de Desarrollo Economico, ya que solo cuenta con las facultades contenidas en el artículo 42 del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli…”*

* ***592.pdf:*** Documento que se encuentra integrado por los oficios siguientes:
* Oficio SA/ST/0059/2023 del once de octubre de dos mil veintitrés, remitido por el Secretario Técnico al Titular de la Coordinación de Transparencia, por medio del cual, manifestó adjuntar el oficio SA/2700/2023, por medio del cual el Departamento de Normatividad y Convenios da respuesta a la solicitud.
* Oficio SA/2700/2023 del Departamento de Normatividad y Convenios remitido al Secretario del Ayuntamiento, a través del cual da respuesta a la solicitud, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…después de una búsqueda exhaustiva, a partir del año 2022 a la fecha, no existen la información referente a: " ... las medidas que implementa el ayuntamiento para informar a la ciudadanía en general, sobre si es o no legal los permisos que otorga la asociación ACME ... " (SIC}. Por lo que, es procedente lo previsto en el criterio 07 /17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,…”*

*…*

*Respecto a la información consistente en: " ... los documentos en posesión del ayuntamiento en donde se me mencioné a la asociación ACME" (SIC), hago de su conocimiento que, dicha información se puede consultar en los siguientes documentos:*

*Acta de la Trigésima Primera Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Extraordinaria, del 16 de diciembre de 2022.*

***Link de descarga:***[*http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion\_II\_B2/31.%20TRIG%C3%89SIMA%20PRIMERA%20EXTRAORDINARIA\_compressed.pdf*](http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion_II_B2/31.%20TRIG%C3%89SIMA%20PRIMERA%20EXTRAORDINARIA_compressed.pdf)

*Acta de la Vigésima Quinta Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Ordinaria, del 13 de abril de 2023.*

***Link de descarga:***[*http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion\_II\_B2/25.%20VIG%C3%89SIMA%20QUINTA%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA.pdf*](http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion_II_B2/25.%20VIG%C3%89SIMA%20QUINTA%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA.pdf)

* ***SAIMEX 592.pdf:*** Circular DJ/3383/2023 del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, remitido por la Directora Jurídica a la Coordinadora de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado, por medio del cual, informó lo siguiente:

*“…no me encuentro en posibilidades de remitir la información solicitada dado que no es competencia de esta dependencia administrativa, por lo que se NO administró la información que enuncia el peticionario y por consiguiente a esta área Jurídica no le es posible generar acuerdo de inexistencia…*

Inconforme con la respuesta, la parte **Recurrente** interpuso recurso de revisión, considerando que se le había conculcado su derecho de acceso a la información, señalando como acto impugnado *“Respuesta” (sic)* y razones o motivos de inconformidad *“Niegan la información pese a que en sus archivos si obra documentos referente a la asociación mencionada. Adjunto prueba. Solicito que no mientan y envíen todos los documentos donde referencian a esa asociación” (sic)*; argumentaciones las cuales se encuentran fundadas para la interposición de los recursos, al encuadrar en la hipótesis normativa establecida en la fracción I del artículo 179 de la Ley de Transparencia Local[[1]](#footnote-1), relativa a la negativa a la información.

Ahora bien, la parte Recurrente al momento de interponer el recurso de revisión, adjuntó los documentos *“****RESPUESTA SAIMEX 591 (1).pdf*** y ***ANEXO 591 (1).pdf****”*, de los que se desprende el contenido siguiente:

* ***RESPUESTA SAIMEX 591 (1).pdf***: oficio DDE/2373/2023 del diez de octubre de dos mil veintitrés, remitido por la Directora de Desarrollo Económico al Titular de la Coordinación de Transparencia, ambos del Sujeto Obligado, a través del cual manifestó adjuntar el oficio DDE/SC/DCVPYM/326/2023 mediante el cual proporcionó respuesta a la solicitud de información 00591/CUAUTIZC/IP/2023.
* ***ANEXO 591 (1).pdf****:* oficio DDE/SC/DCVPYM/326/2023 remitido por el Jefe del Departamento de Comercio en Vía Pública y Mercados a la Directora de Desarrollo Económico, mediante el cual proporcionó respuesta a la solicitud de información 00591/CUAUTIZC/IP/2023, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…en relación a la solicitud recibida mediante SAIMEX 00591CUAUTIZ/IP/2023, que en la parte conducente solicita:*

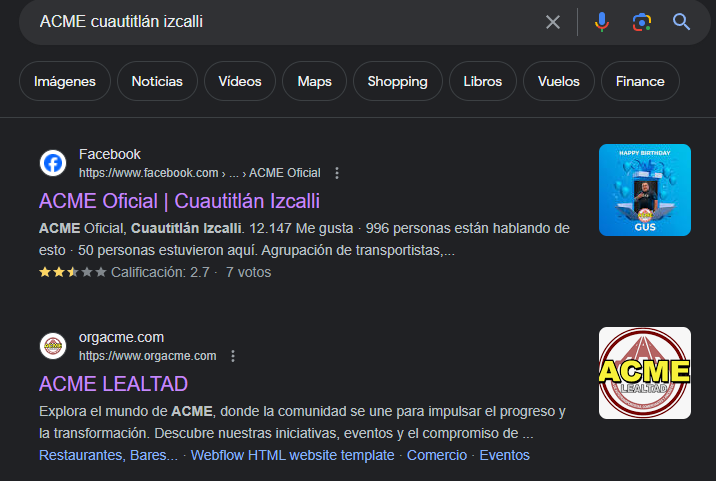
* *Solicito la facultad que permite a la asociación ACME cobre a comerciantes para que puedan poner su negocio en ciertos puntos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli” (SIC)*

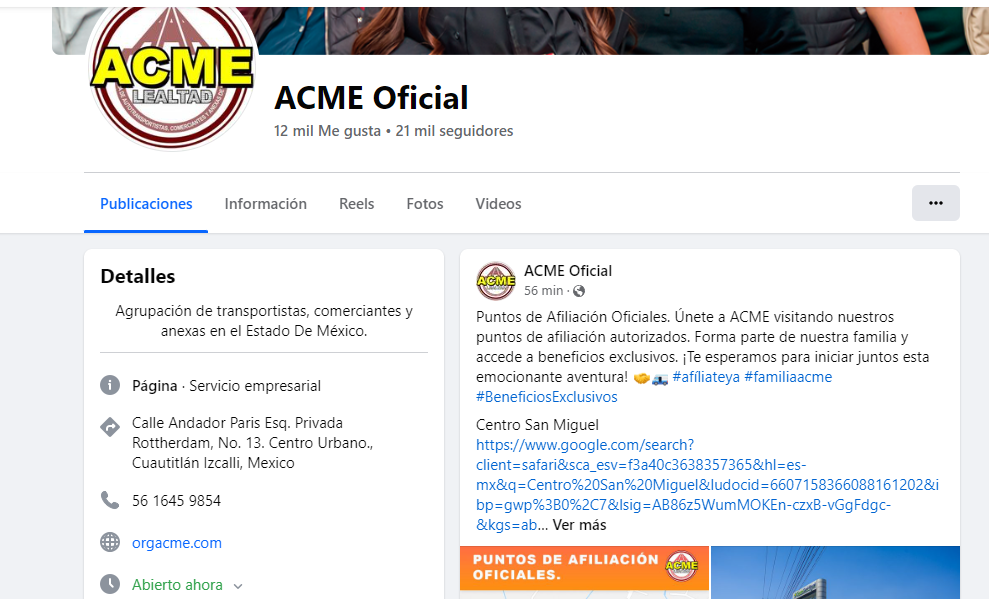
*Al respecto me permito informarle que esta institución es la encargada de realizare los cobros de uso de las vías públicas para ejercer el comercio y otorgar los permisos para ellas, de acuerdo al Código Financiero del Estado de México, en sus artículos 34, Art. 36 y Art 120. En consecuencia, no tenemos conocimiento ni reconocemos cualquier otro tipo de cobro fuera de esta dependencia, así como los acuerdos que puedan existir entre particulares y la asociación de ACME”*

Documentos que una vez analizados, no se acredita vinculación alguna con el asunto que se estudia y resuelve, toda vez que, son diferentes números de solicitud de información así como la solicitada no corresponde al mismo requerimiento, únicamente versan en la misma asociación, sin que ello acredite o presuma información alguna.

Hechas las acotaciones anteriores, se procede determinar si la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** se encuentra apegada a derecho. En esa virtud, lo procedente es hacer estudio del marco normativo que rige el actuar del **Sujeto Obligado**, a efecto de estar en posibilidades de determinar, si existe facultad, función y/o atribución que lo constriña a generar, administrar o poseer la información.

Por lo que en primer lugar, resulta necesario determinar que es la ACME, referida por la parte **Recurrente**, por lo que se hizo búsqueda en internet[[2]](#footnote-2), a través del motor de búsqueda denominado “google” (al ser una fuente de acceso público), encontrando los resultados siguientes:





Con base en lo anterior, podemos concluir que la parte **Recurrente** peticiona la información de la “Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas en el Estado de México “ACME” con domicilio en Cuautitlán Izcalli.

Ahora bien, el **Sujeto Obligado** emitió respuesta a través de la Dirección de Desarrollo Económico, el Secretario Técnico y la Dirección Jurídica, quienes respondieron objetivamente respecto del numeral **1**, no contar con información al no ser competencia de dichas dependencias administrativas.

En ese orden de ideas, de conformidad con el Criterio **028-10** emitido por el Pleno del entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales **IFAI**, el cual establece que se deberá garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración criterio que para mayor referencia se cita a continuación:

***“Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico.*** *La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.”*

(Énfasis añadido)

Robustece lo anterior el Criterio Orientador **16/17** emitido de igual forma por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que a la literalidad prevé:

***“Expresión documental****. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.*

*Resoluciones:*

*• RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.*

*• RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*

*• RRA 0540/17. Secretaría de Economía. 08 de marzo del 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas”*

(Énfasis añadido)

Es así que, cuando se aprecien deficiencias en la solicitud, o bien, que los particulares no especifiquen el documento en donde consta la información requerida, los sujetos obligados deben realizar acciones tendientes a garantizar el derecho de los recurrentes, haciendo entrega del soporte documental que dé cuenta de los requerimientos.

Criterios que resultan de observancia en el presente asunto atendiendo que, si bien es cierto, de la redacción del requerimiento de información pudiera entenderse que se requiere al Sujeto Obligado **justifique la legalidad o ilegalidad de permisos** otorgados a la citada asociación, también es cierto que, de conformidad con el principio de legalidad establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que consagra que los entes de gobierno solo pueden hacer aquello que explícitamente tienen permitido y establecido en su **marco jurídico**, no pudiendo ir más allá de las facultades, funciones, atribuciones y obligaciones señaladas.

En consecuencia, resulta dable hacer estudio del marco normativo del Sujeto Obligado a efecto de poder determinar si existe facultad, función o atribución que lo constriña a **publicitar o hacer del conocimiento a la ciudadanía los permisos que ha emitido**, atentos a ello, se traen a colación los artículos 31 fracción I Ter, XXIV Quáter, XXIV Sexties, 48 fracción XIII Ter, XIII Quáter87, 96 Quáter fracción II Bis, XVIII, XIX, y 167 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 43 fracción III, 50 fracción V y 86 del Bando Municipal 2023 del Sujeto Obligado, 14 fracción IV, 29 fracción VI inciso e), 38 fracción XI y 42 fracciones XII, XXI, XXXIII y XXXVII del Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México se advierten atribuciones para la emisión de permisos, preceptos legales que se citan a continuación para pronta referencia:

***“Ley Orgánica Municipal del Estado de México***

***Artículo 31.-*** *Son atribuciones de los ayuntamientos:*

*…*

***I. Ter.*** *Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia, mismo que deberá publicarse dentro de los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio Fiscal y será aplicable hasta la publicación del siguiente catálogo.*

*El otorgamiento de la licencia o permiso a que hace referencia el párrafo anterior, en ningún caso estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;*

*…*

***XXIV Quáter.*** *Otorgar licencias de construcción y permisos de funcionamiento de unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas, así como de parques y desarrollos industriales, urbanos y de servicios de conformidad con la Evaluación de Impacto Estatal.*

*Para los efectos de la presente fracción, la licencia o permiso correspondiente se expedirá en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la presentación del Dictamen de Giro aprobado.*

*Tratándose de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que requieran Evaluación de Impacto Estatal la licencia o permiso correspondiente deberá otorgarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de que le sea presentada la Evaluación de Impacto Estatal correspondiente, y cuando el solicitante presente el acuerdo de aceptación a la solicitud de Evaluación de Impacto Estatal.*

*…*

***XXIV. Sexties.*** *Aprobar y publicar el programa especial para otorgar la licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de protección civil, que para el efecto proponga la o el presidente municipal en términos de lo dispuesto por la fracción XIII Ter del artículo 48 de la presente Ley.*

*…*

***Artículo 48.-*** *La persona titular de la presidencia municipal tiene las siguientes atribuciones:*

*…*

***XIII Ter.*** *Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de protección civil, conforme a la clasificación contenida en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo.*

*Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia o permiso no esté sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.*

***XIII Quáter.*** *Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento para unidades económicas, de conformidad con lo previsto en las fracciones XXIV Quater y XXIV Quinques del artículo 31 de la presente Ley. Dicha expedición o negación queda supeditada al resultado del Dictamen de Giro o Evaluación de Impacto Estatal según corresponda, dando respuesta en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la presentación de dicho dictamen o evaluación, en su caso, la cual deberá ser fundamentada y acorde al principio de transparencia.*

*Las actividades que cuenten con Evaluación de Impacto Estatal no requerirán la emisión de Dictamen de Giro.*

*La autoridad municipal deberá iniciar los trámites relativos con las autorizaciones, licencias o permisos, a partir de que el solicitante presente el acuerdo de aceptación de la solicitud de Evaluación de Impacto Estatal.*

*Una vez que el solicitante entregue la Evaluación de Impacto Estatal, de ser procedente, podrá obtener la autorización, licencia o permiso correspondiente.*

***Artículo 87.-*** *Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias:*

*I. La secretaría del ayuntamiento;*

*II. La tesorería municipal.*

*III. La Dirección de Obras Públicas o equivalente. I*

*V. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente.*

*V. La Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente;*

*VI. La Dirección de Ecología o equivalente.*

*VII. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente.*

*VIII. La Coordinación Municipal de Protección Civil o equivalente.*

*IX. La Dirección de las Mujeres o equivalente.*

*X. Dirección del Campo o equivalente, preferentemente en los municipios cuyas características geográficas, territoriales, sociales, culturales, políticas y económicas sean predominantemente inherentes al ámbito rural.*

***Artículo 96 Quáter.-*** *El Titular de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:*

*…*

***II Bis.*** *Impulsar y difundir la simplificación de trámites y reducción de plazos para el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables;*

*…*

***XVIII****. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a las que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la apertura y funcionamiento de unidades económicas;*

*Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia no esté sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;*

***XIX****. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los permisos o licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los datos generados al Sistema que al efecto integre la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la información respectiva;*

***Artículo 167.-*** *Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por autoridades o servidores públicos municipales que carezcan de la competencia necesaria para ello, o los que se dicten por error, dolo o violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del municipio sobre sus bienes del dominio público, o cualquier otra materia, serán anulados administrativamente por los ayuntamientos, previa audiencia de los interesados.*

***Bando Municipal 2023 de Cuautitlán Izcalli***

***Artículo 43.*** *En materia de mejora regulatoria, el Ayuntamiento contará con la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, la Coordinación de Mejora Regulatoria y los Comités Internos de Mejora Regulatoria, para realizar las siguientes acciones:*

*…*

***III****. Proponer los procedimientos necesarios, trámites y servicios sencillos y ágiles que permitan simplificar a la ciudadanía la obtención de permisos, licencias y autorizaciones;*

***Artículo 50.*** *Para el adecuado desarrollo económico en el Municipio, se deberán llevar a cabo las acciones siguientes:*

*…*

***V.*** *Expedir permisos provisionales al pequeño comercio, por acuerdo de declaratoria de temporalidad por pandemia, de conformidad con los acuerdos que expida el Ayuntamiento;*

***Artículo 86.*** *Se requiere licencia vigente o permiso de la autoridad municipal para:*

***I****. El uso de suelo, que autorizará: densidad de construcción, intensidad de ocupación del suelo, altura máxima de edificación, número de cajones de estacionamiento, alineamiento y número oficial;*

***II****. Obra nueva, que autoriza: Construcción de edificaciones, ampliación o modificación de la obra existente, reparación de una obra existente, demolición parcial o total, excavación y relleno, construcción de bardas que excedan 2.20 m de alto y 10.00 m de largo, obras de conexión de agua potable, drenaje, líneas eléctricas, ductos de gas, líneas telefónicas y líneas de televisión por cable, realizadas por particulares, cambio de la construcción existente a régimen de condominio, modificación del proyecto de una obra autorizada, construcción e instalación de antenas para radio telecomunicaciones y de anuncios publicitarios que requieran o no de elementos estructurales;*

***III****. Permiso para realizar obras de instalaciones subterráneas, superficiales o aéreas;*

***IV****. Cambio de uso de suelo o modificación de densidad, intensidad, altura máxima y permitida y coeficiente de ocupación del suelo en edificaciones o predios baldíos, apegado al Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente;*

***V****. Colocación de anuncios publicitarios en propiedad privada o en la vía pública;*

***VI****. Colocar stands publicitarios, carpas, lonas, degustación, sonorización y valla móvil en la vía pública;*

***VII****. Mantenimiento de anuncios publicitarios y antenas de radio difusión y/o telecomunicación; y*

***VIII****. Las demás que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias aplicables.*

*No requieren licencia o permiso de la autoridad municipal, las obras contempladas en el artículo 18.24 del Título Segundo de las Licencias, Permisos y Constancias, Capítulo Primero del Código Administrativo del Estado de México.*

***Reglamento de Organización Interna de la Administración Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México***

***Artículo 14-*** *La Coordinación General de Comunicación Social, además de las que establece las disposiciones legales de la materia; contará con las siguientes funciones:*

*…*

***IV****. Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico a efecto de revisar, previo a su aprobación, aquellos permisos que en materia de espacios físicos publicitarios que puedan afectar la imagen urbana del municipio;*

*…*

***Artículo 29.-*** *La Secretaria del Ayuntamiento para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia contará con las siguientes áreas administrativas:*

*…*

***VI****. Subsecretaría de vinculación:*

*…*

***e****. Área de Permisos y Eventos;*

*…*

***Artículo 38. -*** *La persona titular de la Dirección de Desarrollo Urbano además de las facultades que le señalan las disposiciones legales vigentes tendrá, entre otras, las siguientes:*

*…*

***XI****. Difundir los requisitos y trámites para obtener las licencias, permisos, autorizaciones, cédulas y constancias en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcciones;*

***Artículo 42. -*** *La persona titular de la Dirección de Desarrollo Económico, además de las facultades que le señalan las disposiciones legales vigentes tendrá, entre otras, las siguientes:*

***I****…*

***XII****. Expedir Licencias, Permisos y Cédulas de Funcionamiento a las unidades económicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, así como su revocación cuando no dependa de otra autoridad; asimismo, podrá expedir la Licencia Provisional de Funcionamiento o Permiso de Funcionamiento en los términos que señalan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, llevar un registro de ello, así como proponer campañas para la regularización de Licencias de Funcionamiento, previo cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;*

***XIII****…*

***XXI****. Expedir, renovar, modificar y revocar los permisos, autorizaciones o cédulas para actividades económicas o de prestación de servicios en vía pública, ya sea en puesto fijo, semifijo, comercio ambulante o de temporada;*

***XXII****...;*

***XXXIII****. Ordenar y ejecutar la práctica de visitas de verificación e inspección, para comprobar que las Unidades Económicas que desarrollen actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios cumplan con las disposiciones jurídicas que regulan su funcionamiento, para lo cual designará a los inspectores, verificadores y notificadores para su realización; ordenando y ejecutando, en su caso, la suspensión de actividades y/o clausura de la unidad económica que incumpla con las disposiciones jurídicas que regulen su funcionamiento; así como imponer las medidas de seguridad que resulten procedentes; todo lo anterior por incumplimiento a las disipaciones contenidas en el Código Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, el Reglamento de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; el Reglamento para la Recepción, Guarda y Protección de Vehículos en Estacionamientos de Servicio al Público del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y el Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli;*

***XXXIV****…;*

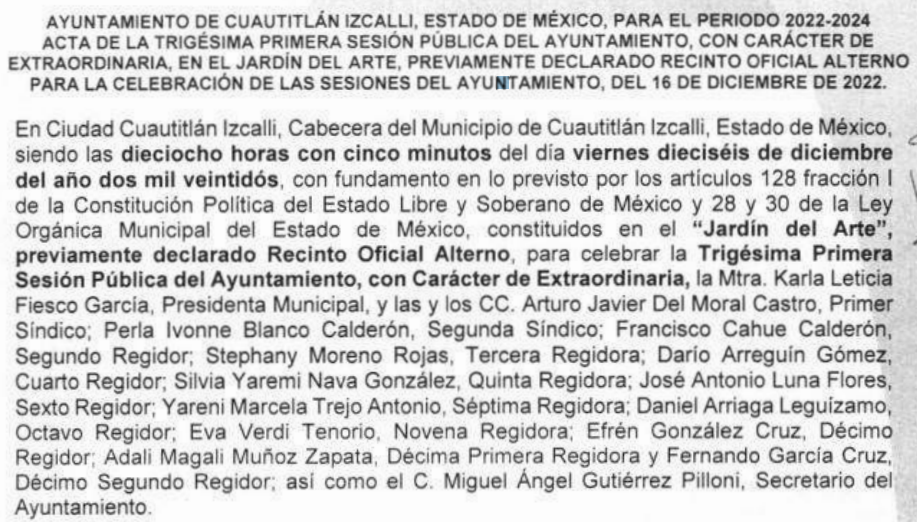
***XXXVII****. Verificar que las Unidades Económicas que realicen la venta de bebidas alcohólicas cuenten con la Licencia de Funcionamiento Vigente, así como con el Dictamen de Giro Municipal; y en caso de que exista incumplimiento a la normatividad vigente, aplicar las medidas de seguridad que resulten procedentes al momento de la infracción, así como iniciar los Procedimientos Administrativos comunes que en derecho procedan, y en su caso dar vista al Ministerio Público o autoridad competente por la posible comisión de algún delito;*

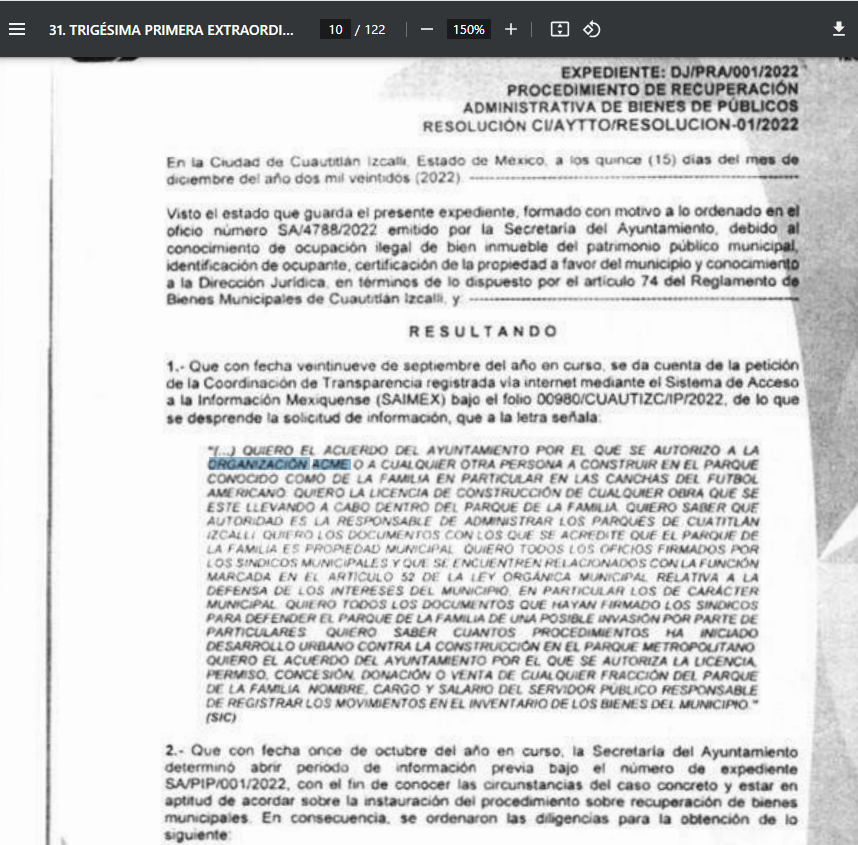
***XXXVIII****…*

Ordenamientos normativos que establecen las distintas unidades administrativas del Sujeto Obligado que cuentan con atribuciones para la expedición de permisos de funcionamiento de negocios de bajo riesgo, unidades económicas, así como la renovación, modificación o su revocación, asimismo, **no se advierte atribución relativa a informar a la ciudadanía sobre la legalidad en la expedición de permisos**, consecuentemente se tiene por colmado el requerimiento en estudio.

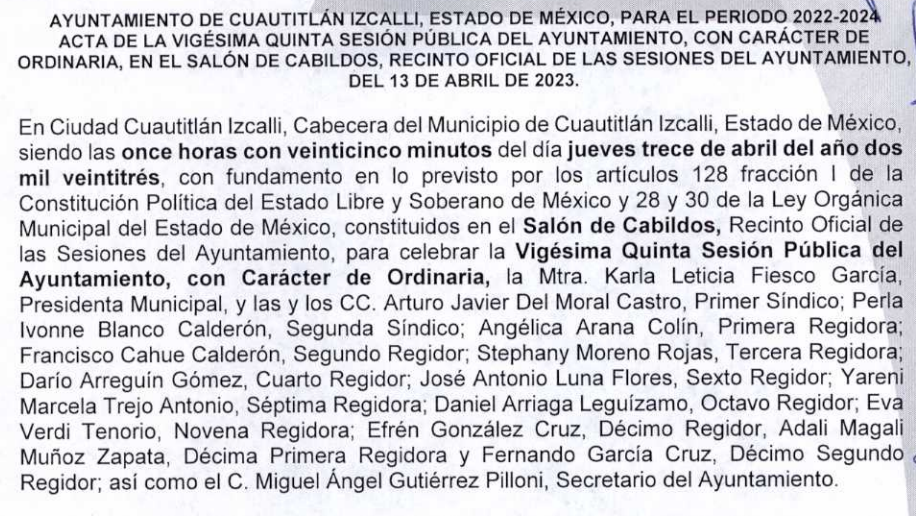
Ahora bien, respecto al requerimiento 2, relativo a los documentos en que se mencione a la citada asociación, el Sujeto Obligado se encuentra contenida en: Acta de la Trigésima Primera Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Extraordinaria, del 16 de diciembre de 2022 y en el Acta de la Vigésima Quinta Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Ordinaria, del 13 de abril de 2023, proporcionando los enlaces electrónicos en que pueden ser consultadas. Páginas electrónicas que se hizo consulta de su contenido, advirtiendo sustancialmente lo siguiente:

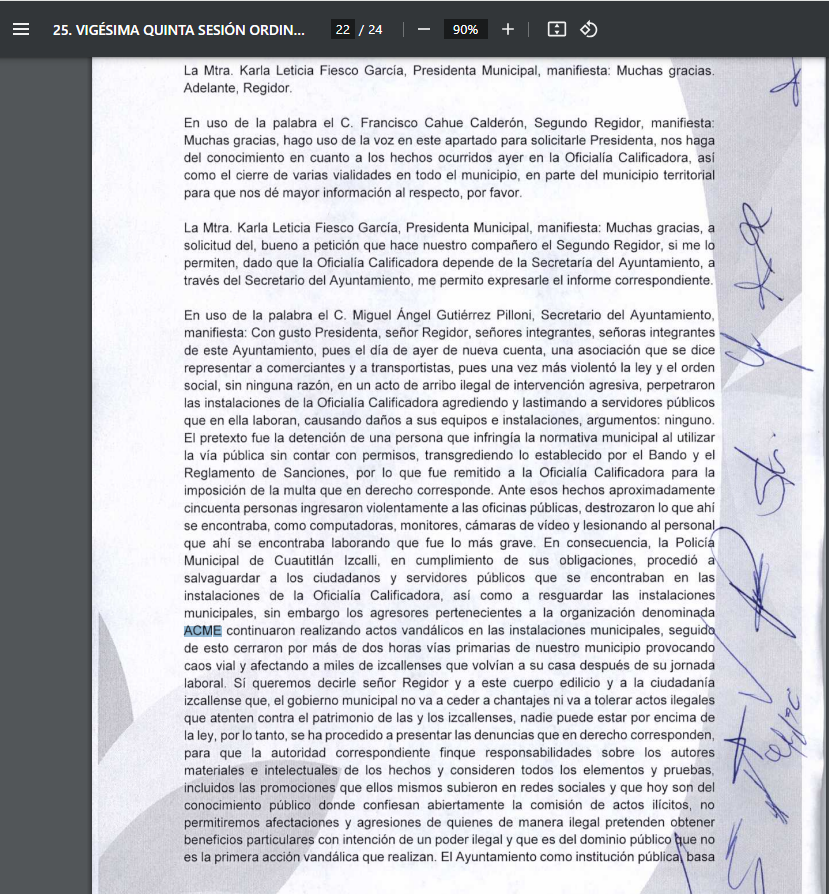
Acta de la Trigésima Primera Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Extraordinaria, del 16 de diciembre de 2022. **Link de descarga:** <http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion_II_B2/31.%20TRIG%C3%89SIMA%20PRIMERA%20EXTRAORDINARIA_compressed.pdf>[[3]](#footnote-3):





Acta de la Vigésima Quinta Sesión Pública del Ayuntamiento con Carácter de Ordinaria, del 13 de abril de 2023. **Link de descarga:** <http://transparencia.izcalli.gob.mx/wp-content/uploads/dataTransparencia/articulo94/fraccion_II_B2/25.%20VIG%C3%89SIMA%20QUINTA%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA.pdf>





De conformidad con las imágenes anteriores, se tiene por acreditado que de su contenido se observa mencionada a la asociación ACME, de quien se peticiona la información. Consecuentemente, se tiene por atendido el requerimiento de información, objeto de estudio en los párrafos previos.

En este apartado, resulta necesario precisar que este Órgano Garante no cuenta con atribuciones para dudar de la veracidad de la información remitida por los sujetos obligados, conforme al artículo 36 que otorga la Ley de la Materia. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio 31/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, que enuncia lo siguiente:

*“****El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados.*** *El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. Expedientes: 2440/07 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal 0113/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – Alonso Lujambio Irazábal 1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde 2395/09 Secretaría de Economía - María Marván Laborde 0837/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. – María Marván Laborde”*

En esta misma tesitura, es de subrayar que el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

***Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.* ***Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico****;*

*(…)*

Siendo aplicable el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 02/11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***“INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

***1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;***

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Es con base en lo anterior, que se tiene por acreditado que el **Sujeto Obligado** emitió respuesta en términos de Ley, por lo que, **con fundamento en la fracción II del artículo 186,** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMA** la respuesta de la solicitud número **00592/CUAUTIZC/IP/2023**, que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **CONFIRMA** la respuesta del **Sujeto Obligado** emitida a la solicitud de información **00592/CUAUTIZC/IP/2023**, por resultar infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **Recurrente**, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** **NOTIFÍQUESE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), al **Recurrente** y hágasele del conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CCR/

1. **Artículo 179.** El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:

   **I.** La negativa a la información solicitada; [↑](#footnote-ref-1)
2. Realizada el veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro a las 13:21 horas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consultada el veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro a las 11:47 horas. [↑](#footnote-ref-3)